



FOTO: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA

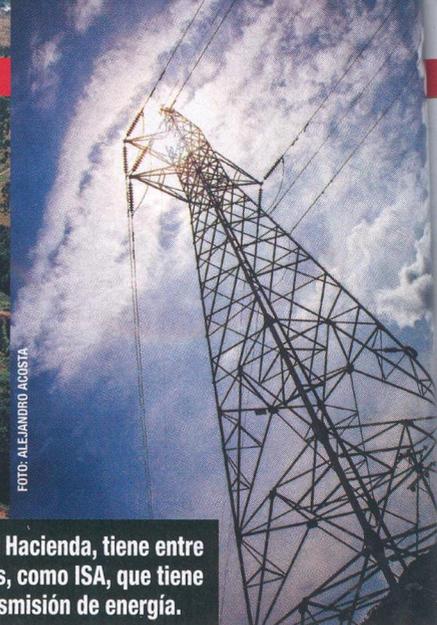
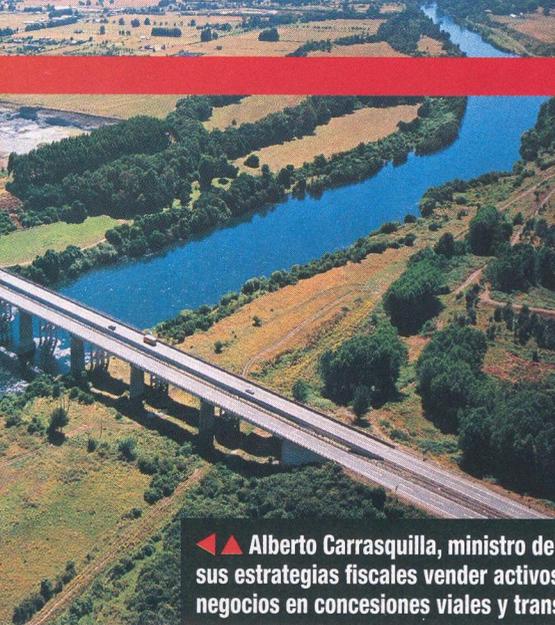


FOTO: ALEJANDRO ACOSTA

◀ Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, tiene entre sus estrategias fiscales vender activos, como ISA, que tiene negocios en concesiones viales y transmisión de energía.

RECURSOS ■

Salió a bailar ISA

El Gobierno comenzará a vender sus participaciones en activos públicos para enfrentar la estrechez fiscal. La venta de esta joya de la corona provocará duros debates políticos y recordará la operación de Isagén, pero con los protagonistas en las orillas contrarias. ¿Para dónde irían los recursos?

DESDE EL COMIENZO DEL año, el Gobierno empezó a ventilar la posible venta de activos para atender la apretada situación fiscal. En principio se mencionó a **Ecopetrol**, que tiene un 8,5 por ciento pendiente de venta —ya aprobada por el Congreso— e incluso una operación con alguna de sus filiales, como **la transportadora Cenit**, que maneja los oleoductos. Ahora parece que todos los caminos conducen a Interconexión Eléctrica S. A. (ISA).

El Ministerio de Hacienda divulgó hace unos días un comunicado en el que advierte que el Gobierno evalúa la estrategia de administración de activos para optimizar la rentabilidad del portafolio de las empresas en las cuales participa. Entre ellas está “ISA —el único activo que menciona—, en la cual la Nación tiene el 51 por ciento”. Además invitó a compañías especializadas para realizar las asesorías correspondientes. Y en los últimos días designó a la firma de abogados Posse Herrera & Ruiz a fin de estructurar el proyecto de venta e integrar en lo posible en un solo paquete la participación de la Nación y el 10 por ciento que tiene EPM, que también está en venta.

No será un proceso fácil. Aunque no necesita permiso del Congreso, las ten-

siones y los debates políticos no se harán esperar. Sobre todo porque el Centro Democrático y, específicamente, el hoy presidente Iván Duque, como senador, se opusieron en su momento a la venta de Isagén.

“#No concilio que se venda Isagén privando a la Nación de un patrimonio rentable y estratégico”. Así trino Duque, el 6 de mayo de 2015, ante la iniciativa del Gobierno de Juan Manuel Santos de vender la participación mayoritaria que tenía la Nación en ese activo para buscar recursos que le permitieran apalancar el desarrollo de la infraestructura.

A pesar de la férrea oposición, en 2016 Isagén quedó en manos del fondo internacional Brookfield. Sus recursos —unos 6 billones de pesos— pasaron al Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura (Fon-des). Y luego capitalizaron a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para impulsar la infraestructura del país, como las concesiones de cuarta generación (4G), transportes masivos y hasta proyectos de energías renovables no convencionales.

Hoy, el escenario parece un *déjà vu*, y la historia de Isagén amenaza repetirse en ISA, pero con protagonistas en orillas distintas. El Gobierno del presidente Duque pasa por un momento complejo de estre-

chez fiscal, luego de que la Ley de Financiamiento, aprobada a finales del año pasado, no logró todos los recursos previstos en principio. Actualmente, habría cerca de 10 billones de pesos congelados en proyectos que esperan recursos.

Pese al recorte en el gasto público y a mayores eficiencias en la Dian en el recaudo, la venta de activos es una necesidad y una de las principales cartas del Gobierno. Este tiene su mayor interés en que no caiga la inversión pública; por eso plantea sustituir unos activos que no rentan lo suficiente por unos flujos de inversión que no quiere ver disminuidos, y darle al país bienes públicos a un ritmo de 1,4 por ciento del PIB durante cuatro años. De lo contrario, y ante las dificultades fiscales, solo le quedaría llevar la inversión pública a cero.

Pero muchos se preguntan para qué destinará el Gobierno los recursos provenientes de las ventas de activos estratégicos, como ISA. Si los convertirá en otros activos para mejorar la competitividad, por ejemplo, vía infraestructura, cambiando un activo por otro; o si los destinará a gasto corriente para tapar huecos fiscales. Por el primer camino, ya existe una institucionalidad que creó